

Reflexiones en torno a un sexenio

Puede señalarse el pasado 30 de agosto de 1976 como la fecha límite al avance de la política echeverrista en las esferas de gobierno. La devaluación oficial de la moneda mexicana se interpretó como una aceptación explícita, por parte del gobierno que acaba de concluir, de los errores que en el plano de su política económica mantuvo durante seis años, y de las dificultades que tendría cualquier grupo político para intentar repetir los lineamientos generales del proyecto de desarrollo echeverrista.

Sin embargo el descrédito público tan amplio en que cayó la política del régimen pasado, no sólo tiene como causa los efectos negativos que produjo la devaluación monetaria, tales como el mayor aumento en los precios de las mercancías, sino otros factores económicos y políticos cuyo origen se remonta a los primeros años del sexenio echeverrista.

Tratando de hacer un recuento de todos los hechos importantes del régimen anterior, y determinar con ello el carácter de la política de gobierno de Luis Echeverría, y el porqué de los ataques tan fuertes que recibió a fines de su mandato, de la polémica que generó y la animadversión que produjo entre tantos sectores de masas del país, con lo cual se creó una imagen generalizada de rechazo hacia todo aquello que podría conducir a reformas progresistas como las estiladas por Echeverría, podríamos decir que, inicialmente, su proyecto de gobierno para el desarrollo económico nacional se diferenció radicalmente de los propuestos por gobiernos anteriores, caracterizados por el apoyo del Estado hacia inversiones pequeñas, débiles y atrasadas, hechas por la iniciativa privada. Por el contrario, el régimen, cuyo periodo de gobierno acaba de concluir, inició su primer año oponiéndose abiertamente a la política estatal de financiar con el presupuesto público el crecimiento económico de las empresas industriales comerciales y de servicios, cuya motivación primera era la de acumular riqueza a la mayor velocidad posible, con la menor inversión de capital, con base en géneros de explotación del trabajo más inhumanos que por intermedio de la tecnología, descuidando, abiertamente, las necesidades que tenía el país de reinversión ampliada de sus capitales, por lo cual la nación afronta niveles de desempleo muy altos.

Al respecto Echeverría restringió, desde el principio de su gobierno, todo género de subsidios económicos a las empresas que tradicionalmente se habían caracterizado por su parasitismo del presupuesto oficial, y no promovían nuevas inversiones, ni niveles más altos de productividad. Tratando de acondicionar los recursos públicos a su estrategia de promoción del desarrollo económico, cerró todos los conductos de transferencia de riqueza estatal hacia los sectores atrasados y tradicionales de la economía, reduciendo, por consecuencia, el rubro de las inversiones públicas en el primer año de gobierno, y gene-

rando con ello lo que en su tiempo se denominó la "atonía económica", que tanto malestar produjo entre los inversionistas del país, los cuales esperaban la continuidad a la línea mantenida de los gobiernos desde hace 30 años.

En su segundo año, en cambio, el régimen echeverrista modificó su política presupuestal de inversiones al contratar un promedio de 1 500 millones de dólares, destinados a la ampliación del sector paraestatal de la economía, principalmente de empresas industriales de bienes de capital, cuya edificación implicaba que el gobierno contrataría la realización de las obras con empresas extranjeras importadoras de bienes de consumo duradero y con una tecnología avanzada, descartando, automáticamente, a aquellos sectores internos del país, que para subsistir dependían del contratismo gubernamental en bienes de consumo inmediato.

Empezaba a generarse el conflicto abierto de intereses entre los sectores avanzados del capital privado con los sectores avanzados al interior del gobierno.

Hacia los últimos meses de 1972, en las esferas de poder estatal, empezó a promoverse la idea de la necesidad del gobierno para allegarse nuevos y cuantiosos recursos fiscales para llevar a cabo su costosa política de inversiones. Surgió entonces la propuesta de reforma fiscal a las excesivas utilidades de las empresas privadas. El porcentaje de gravamen sobre el volumen de las ganancias no era muy alto en comparación con el que existe en países más desarrollados, sin embargo, la respuesta de los empresarios a esta propuesta fue un no unánime y rotundo. El abismo entre el gobierno y algunos sectores empresariales, principalmente el capital medio y pequeño del país, se ensanchaba.

A pesar del fracaso total de la reforma fiscal, el gobierno persistió en apoyar selectivamente, con subsidios, al sector de las grandes empresas, incluyendo las transnacionales con vías a consolidar su hegemonía sobre la economía del país. Los decretos de descentralización industrial que otorgaban créditos fiscales a las empresas; los certificados de devolución de impuestos (Cedis); los decretos de Fomento Industrial, que otorgaban exenciones de impuestos, fueron algunas medidas que el gobierno tomó para favorecer a las grandes empresas del país, en detrimento de las pequeñas.

Hacia principios de 1973 la crisis internacional del capitalismo entra en una fase aguda de depresión económica que origina, al interior de nuestro país, la caída de exportaciones, lo que, sumando el aumento de las importaciones en bienes de capital promovido principalmente por el gobierno, cuyos precios se encontraban en franca alza, provocan un fuerte déficit en la balanza de pagos, que salta de los 790 millones de dólares a los 2 600 millones de dólares en 1974. El gobierno, ante esto, se ve obligado a aumentar los volúmenes de préstamos desde el exterior, tanto para equilibrar la balanza de pagos como para estimular a la economía nacional en depresión, la cual sólo aumentó, a partir de 1973, en un 4% anual, a diferencia del 16% de crecimiento de la inversión pública.

Por supuesto este crecimiento en las inversiones del Estado sólo se logró con un creciente endeudamiento externo, el cual, según cálculos del Banco de México, alcanzó a llegar, en 1976, a los 30 000 millones de dólares. Es decir, la deuda externa se incrementó en 27 000 millones de dólares durante este sexenio.

La principal consecuencia de este endeudamiento tan alto fue el enorme aumento de circulante monetario, que no creció al parejo de la producción interna del país. Resultado, la aparición del fenómeno inflacionario en los precios, que alcanzó porcentajes del 20% anual.

El gobierno trató de controlar con medidas oficiales la carrera alcista de los precios, la cual nulificaba todo su proyecto de redistribución del ingreso, principalmente de los sectores de clase media hacia los sectores obrero y campesino, en apoyo a su política pro-grandes capitales. Es decir, que si de un lado se permitían pequeños aumentos a los precios de los productos del capital medio, se era mucho más flexible y espléndido con la producción de la gran industria.

De otra parte, el proceso inflacionario también generó que la banca nacional, para evitar especulaciones sobre sus recursos monetarios, lograra, con el apoyo del gobierno, elevar sus tasas de interés financiero, encareciendo, automáticamente, el crédito tan necesario para la continuidad de las funciones de las medianas industrias.

La baja en la demanda de bienes de consumo tanto por parte del gobierno como de los sectores obrero y campesino, cuya capacidad de compra disminuyó, producto de la inflación y del control de sus salarios; el control discriminatorio de precios que ejerció el régimen en perjuicio del capital medio; las dificultades que para obtener crédito interno tenían los pequeños capitales, a causa de que el Estado captaba el 70% de los recursos de la banca nacional, vía encaje-legal, y el poco crédito privado que se conseguía era pagando altas tasas de interés; todo esto, en resumen, al igual que el hecho que hacia 1976 el déficit de la balanza de pagos hubiese aumentado 5 veces respecto de 1971, empezó a generar entre los inversionistas el temor de una parálisis de la economía, tanto a causa de una caída de la producción interna y de los desarreglos monetarios al interior del país como por un desequilibrio interno comercial. El miedo se tradujo en la compra de dólares por parte de los inversionistas mexicanos, a un nivel tal que las reservas monetarias del Banco de México no alcanzaban hipotéticamente a pagar los volúmenes de pesos convertidos en moneda extranjera. En ese momento el gobierno devaluó el peso, y aceptó el fracaso de su gestión económica.

13 de enero de 1977

Javier Rosas Sánchez